

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11^o ENE 2021

Auto Interlocutorio nro.

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
REFERENCIA:	76001-23-33-000-2020-00105-00
DEMANDANTE:	NATALIA LUCÍA ARISTIZABAL RAMIREZ
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG, MUNICIPIO DE BUGA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
ASUNTO:	ADMITE DEMANDA

ANTECEDENTES

Natalia Lucía Aristizabal Ramírez a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pretende¹ la nulidad del oficio nro. 2016RE1810 del 10 de agosto de 2016 expedido por la oficina de prestaciones sociales de la Alcaldía Municipal de Buga, que resuelve negativamente la solicitud del reconocimiento de pensión de sobreviviente en calidad de hija de la causante Emma Lucía Ramírez Betancourt.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se disponga el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante a partir del 27 de noviembre de 2014 fecha del deceso de la causante, mesadas a las que se le deben realizar los reajustes legales sin descontar los aportes a salud, sumas que deben ser indexadas, costas y agencias en derecho.

CONSIDERACIONES

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales, para ser admitida.

1. DE LA JURISDICCIÓN

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

¹ Ver folio 1 anverso y reverso



2. DE LA COMPETENCIA

2.1. Factor funcional

En cuanto a la competencia funcional el CPACA indica:

"ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

En el asunto concreto, se pretende la nulidad de los actos administrativos, configurado frente a la negativa de la pensión de sobrevivientes, por lo que resulta ser de carácter laboral y no proviene de un contrato de trabajo, siendo competencia de este Tribunal.

2.2. Factor territorial

En cuanto a la competencia territorial el CPACA señala:

"Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios."

En el presente asunto, se observa que el último lugar de trabajo la causante Emma Lucía Ramírez Betancourt fue en la Institución Educativa San Vicente del municipio de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca² ubicada en la ciudad de Cali, en tal sentido se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

2.3 Factor Cuantía

El artículo 157 del CPACA señala:

"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. (...)

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

² Ver folio 13



Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

La estimación razonada de la cuantía señalada en el libelo de la demanda³ hace referencia a un tope mayor de los 50 SMLMV⁴ al reclamarse un reconocimiento pensional superior a los \$77.169.985⁵ millones de pesos.

Ahora bien, teniendo en cuenta el inciso final del citado artículo 157 del CPACA, se tienen en cuenta los tres (03) últimos años, constatados por el despacho de la siguiente manera:

Año	Valor Mesada	No. Mesadas	VALOR
2017	\$ 2.131.903	13	\$ 27.714.734,88
2018	\$ 2.219.098	13	\$ 28.848.267,54
2019	\$ 2.289.665	13	\$ 29.765.645,00
		TOTAL	\$ 86.328.647,42

Por lo anterior y de conformidad con lo mencionado, la cuantía supera tope de los 50 SMLMV y esta Corporación es competente para conocer del presente asunto.

3. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

La conciliación prejudicial es requisito respecto de derechos inciertos y discutibles, razón por la que dicha exigencia no es aplicable en asuntos pensionales por tratarse de derechos ciertos e irrenunciables⁶.

4. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Respecto de la caducidad de los medios de control en la interposición de la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento, el CPACA dispone sobre prestaciones periódicas:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(...)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas (...).”

³ Ver folio 6
⁴ Artículo 152.2 CPACA
⁵ Smlmv año 2020 = \$ 877.803 x 50 smlmv = \$ 43.890.150 pesos
⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, CP RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, providencia del 21 de febrero de 2019. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00160-02(0075-17) estableció: “Como consecuencia de lo anterior, y para resumir la discusión planteada por la demandada, las prestaciones periódicas como las pensionales, en este caso, la pensión gracia, tiene el carácter de irrenunciable como principio mínimo fundamental, posición que no obliga a cumplir el trámite de conciliación extrajudicial aun cuando la entidad que reconoció el derecho es quien impugna su legalidad”



En consecuencia, al ser el caso un asunto pensional el medio de control se puede instaurar en cualquier tiempo⁷.

5. DEL PODER Y LA LEGITIMACIÓN EN ACTIVA Y PASIVA

Con relación a la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento mismo por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

El artículo 160 del CPACA, respecto al derecho de postulación versa:

“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”

A folio 7, obra poder otorgado por la parte demandante, para que se lleven a cabo las presentes diligencias, razón por la cual se encuentra debidamente configurado el derecho de postulación.

Frente a la legitimación y la representación de las entidades dispone el artículo 159 del CPACA:

“Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.”

La apoderada de la parte demandante dentro de la descripción fáctica hecha en el escrito de demanda, hace imputaciones contra el Ministerio de Educación – FOMAG y el Municipio de Guadalajara de Buga – Secretaria de Educación. En ese orden de ideas, la parte demandante y las entidades demandadas están legitimadas, por activa y por pasiva respectivamente, para actuar en las presentes actuaciones.

El artículo 610 del CGP indica la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en la que intervengan entidades públicas, para defender los intereses patrimoniales del Estado.

Pues bien, el Decreto 4085 de 2011, respecto del objetivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señala:

⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, CP RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, providencia del 21 de febrero de 2019. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00160-02(0075-17) estableció “Para el sub judice, es claro que el numeral 1), del artículo 164, del CPACA, determina que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas, de manera que, como la controversia tiene relación con ese tipo de prestaciones, no está sometida al término de caducidad y se puede demandar en cualquier tiempo”.



"ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación. Evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

PARÁGRAFO. Para efectos este decreto. Entiéndase por intereses litigiosos de la Nación, los siguientes:

- a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso".

Por tratarse en el presente asunto de una entidad del orden nacional, se deberá notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico, conforme lo indica el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1365 de 2013 que dice:

"Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos".

6. DE LOS REQUISITOS FORMALES.

De igual forma se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda⁸), 163 (individualización de pretensiones) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior se allegaron los anexos pertinentes que exige el art. 166, incluyendo copia de la demanda en mensaje de datos para los efectos del inciso 3 del art. 199, modificado por el art. 612 de la Ley 1564 de 2012.

Por reunir los requisitos legales el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la demanda instaurada por la señora **NATALIA LUCÍA ARISTIZABAL RAMÍREZ** por medio de apoderado judicial, en contra de la **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FOMAG, MUNICIPIO DE BUGA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**, y en consecuencia dispone:

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

⁸ Designación de las partes: folio 1
Pretensiones: folios 1 anverso y reverso
Hechos y omisiones: folios 1 reverso – 2 reverso
Fundamentos de derecho: folios 2 reverso – 5 reverso
Pruebas: folio 5 reverso
Estimación razonada de la cuantía: folio 6
Dirección para notificación: folio 6 reverso



TERCERO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correo electrónico creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA.

Como no se fijan gastos ordinarios del proceso, para cumplir lo anterior, **ORDENAR a la parte demandante**, de acuerdo con el artículo 199 del CPACA, remitir a quienes deben ser notificados personalmente, en el término improrrogable de DOS (02) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación por estado de la presente providencia, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y de este auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a disposición de los notificados.

Así mismo, deberá aportar, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, certificación de la entidad de servicio postal autorizado, en la que conste la remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, para lo cual allegará copia del oficio remisorio a la Secretaría del Tribunal.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, la Secretaría de esta Corporación no realizará la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: A las demandadas **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.

SEXTO: ADVERTIR a las entidades demandadas que durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda y se encuentre en su poder. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

SEPTIMO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderada de la parte demandante, a la abogada GLORIA TATIANA LOSADA PAREDES, identificada con

RADICACIÓN
Medio de control
Accionante
Accionado

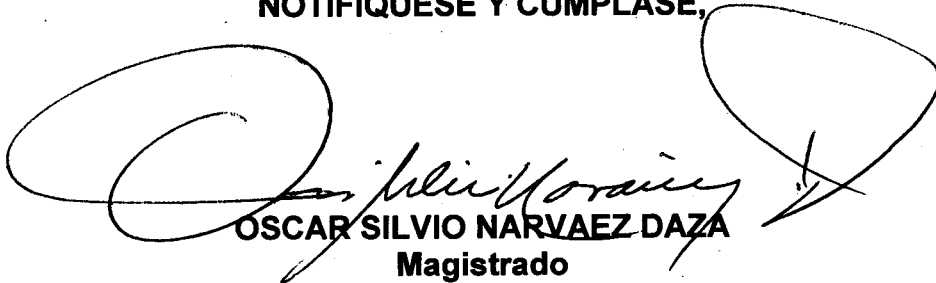
: 2020-00105-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
: NATALIA LUCÍA ARISTIZABAL RAMÍREZ
: NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FOMAG, MUNICIPIO DE BUGA



7

cédula de ciudadanía No. 1.018.436.392 y portador de la tarjeta profesional No. 217.976 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder por el presentado⁹.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,



OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA
Magistrado

⁹ Ver folio 7
Nathaligg
VoBoSecretario